

INFORMARTIVO DE RELATORIA

ABRIL DE 2025

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA



Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Diana Fajardo Rivera	Sentencia T- 073 del 4 de marzo de 2025
<p>La Corte Constitucional protegió los derechos de un trabajador despedido por negarse a bailar durante pausas activas debido a sus convicciones religiosas.</p> <p>La Sala Tercera determinó que el despido fue discriminatorio, recordando que la libertad de conciencia permite resistir órdenes que contradigan creencias profundas. Indicó que, el empleador debía proporcionar alternativas menos invasivas, como ejercicios sin música.</p> <p>La Corte ordenó el reintegro del empleado, exigió a la empresa pedir disculpas y solicitó ajustes al reglamento interno de trabajo.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Vladimir Fernández Andrade	Sentencia T -115 del 31 de marzo de 2025
<p>La Corte amparó los derechos a la salud mental y trabajo digno de un funcionario de la Fiscalía, cuya carga laboral no fue evaluada pese a recomendaciones médicas. La Sala Cuarta destacó que los servidores de la Fiscalía enfrentan factores psicosociales como altas demandas de trabajo, exposición a violencia y jornadas prolongadas.</p> <p>La Corte ordenó a la entidad valorar y ajustar la carga laboral del accionante, realizar seguimiento con la ARL, y promover la sensibilización sobre la prevención y atención del riesgo psicosocial.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar	Sentencia T- 107 del 25 de marzo de 2025
<p>La Corte Constitucional ordenó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no retire esquemas de protección sin verificar el nivel de riesgo, independientemente de que el solicitante pertenezca al Programa de Protección Especializada. La decisión surgió tras la tutela de Josué y Joanna, firmantes del Acuerdo de Paz, cuyo nivel de riesgo fue calificado como "ordinario" pese a recibir amenazas.</p> <p>La Corte amparó sus derechos y ordenó a la UNP realizar un nuevo estudio considerando su condición y la presunción de riesgo extraordinario.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Natalia Ángel Cabo	Sentencia T – 113 del 28 de marzo de 2025
<p>La Corte Constitucional falló a favor de Augusto, quien fue rechazado por Bancolombia, Nequi y Davivienda para abrir cuentas bancarias debido a antecedentes penales de 2017, pese a haber cumplido su condena y demostrar ingresos lícitos.</p> <p>La Sala Primera de Revisión determinó que esta negativa vulneró sus derechos fundamentales, estableciendo que los bancos no pueden imponer barreras automáticas basadas solo en antecedentes penales.</p> <p>La sentencia ordena la apertura de su cuenta y medidas estructurales para evitar discriminación en el sistema financiero.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Diana Fajardo Rivera.	Sentencia T-026 del 04 de febrero de 2025
<p>La Corte Constitucional estudió el caso de Manuel, paciente inconsciente cuyo tratamiento experimental generó desacuerdo entre sus hijos y su pareja. La Corte reiteró que, aunque existe un derecho fundamental a procedimientos experimentales para pacientes inconscientes, su autorización requiere: ser la única opción viable, conocimiento sobre el procedimiento, consentimiento sustituto y aval médico.</p> <p>La tutela fue negada porque no se conocía la voluntad previa de Manuel, los apoyos judiciales estaban en desacuerdo y no existía consenso médico.</p> <p>La Corte aclaró que no sustituye decisiones médicas, pero el procedimiento podría reconsiderarse con acuerdo futuro.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. José Fernando Reyes Cuartas	Sentencia T - 044 del 06 de febrero de 2025
<p>La Corte Constitucional falló a favor de un ciudadano que impetró acción de tutela contra Previsora S.A. por negarse a pagar los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez tras un accidente de tránsito. La aseguradora había calificado su pérdida de capacidad laboral en 0%, pero se negó a financiar una segunda valoración.</p> <p>La Corte determinó que la aseguradora vulneró el derecho a la seguridad social del demandante, reiterando que las compañías de seguros deben asumir estos costos, especialmente cuando el beneficiario está en condición de vulnerabilidad.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Natalia Ángel Cabo.	Sentencia T- 067 del 26 de febrero de 2025
<p>La Corte Constitucional amparó el derecho fundamental al acceso a la información pública de un ciudadano que interpuso tutela contra la Agencia Nacional Digital, INS y Minsalud por negar acceso al código fuente de CoronApp. Las entidades vulneraron el derecho a la información pública al no demostrar legalmente la reserva ni probar daños específicos.</p> <p>La Corte ordenó entregar el código completo, informar sobre versiones actualizadas y capacitar a funcionarios judiciales sobre transparencia algorítmica en herramientas estatales.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. José Fernando Reyes Cuartas	Sentencia SU- 070 del 27 de febrero de 2025
<p>El Consejo de Estado determinó que la decisión de la Procuraduría General de la Nación (PGN) contra la exalcaldesa de Neiva constituía una restricción de derechos políticos, contradiciendo la Sentencia C-544/2005.</p> <p>Posteriormente, la Corte Constitucional concedió protección al debido proceso de la PGN, dejando sin efecto el fallo del Consejo de Estado por incurrir en defecto sustantivo al apartarse de la interpretación constitucional. La Corte aclaró que la inhabilidad sobreviniente no es una sanción disciplinaria sino una consecuencia legal establecida por el legislador en el artículo 38.2 del Código Disciplinario Único.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Diana Fajardo Rivera	Sentencia SU- 054 del 13 de febrero de 2025
<p>La Corte Constitucional revisó una tutela contra un fallo del Consejo de Estado que revocó una decisión favorable de reparación directa por privación injusta de libertad. El accionante estuvo detenido entre 2005-2009 por presunta participación en el atentado al Club El Nogal.</p> <p>La Corte determinó que la providencia judicial: desconoció la conexión de los hechos, aplicó retroactivamente un cambio jurisprudencial sobre caducidad y usurpó competencias al revalorar pruebas penales. La Sala amparó los derechos, anuló el fallo y ordenó emitir nueva decisión integral.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera C.P. José Roberto Sáchica Méndez	Reparación Directa 08001-23-33-000-2022-00088-02 (72.368) 04 de abril de 2025
<p>El Consejo de Estado confirmó la caducidad en un caso de lesión ocular durante servicio militar. Estableció que el término de caducidad inicia cuando la víctima conoce el daño, no cuando se determina su magnitud o secuelas. La jurisprudencia distingue entre: casos donde el conocimiento del daño es inmediato al hecho, y aquellos donde el daño se conoce posteriormente.</p> <p>El Alto Tribunal enfatizó que valoraciones médicas posteriores o la finalización del tratamiento no modifican el conteo de caducidad, pues esto haría que la acción nunca caducara.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil C.P. Maria del Pilar Bahamón Falla	11001-03-06-000-2024-00613-00 5 de febrero de 2025
<p>El caso plantea un conflicto de competencias entre la Procuraduría Regional del Meta y la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA respecto a irregularidades en un contrato de interventoría.</p> <p>El Consejo de Estado determinó que el control disciplinario funciona en dos niveles: interno (entidades) y externo (Procuraduría). Cuando hay faltas conexas entre funcionarios y particulares, la competencia es exclusiva de la Procuraduría. Por tanto, la Oficina del SENA debe investigar a sus funcionarios, mientras la Procuraduría Regional debe ocuparse del contratista interventor, diferenciando claramente responsabilidades contractuales y disciplinarias.</p>	